



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Demandante: CLAUDIA ELENA GÓMEZ ACOSTA
Demandados: COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 017 2023 00197 01
Sentencia: S-051

AUTO

En atención a la escritura pública 1246 del 24 de julio de 2023 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad UNIÓN TEMPORAL FUERZA LEGAL TÉCNICA, se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra., ALEJANDRA HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA T.P. 233.946 del C. S. de la Judicatura. Y se accede a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor de la Dra. SANDRA MILENA NARANJO SALAZAR portadora de la T.P. N° 225.677 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que la apoderada principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por **PORVENIR S.A.**, y en grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, con

motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 24 de noviembre de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

CLAUDIA ELENA GÓMEZ ACOSTA demandó a COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo que se **DECLARE** la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-.

Como consecuencia, solicita se **ORDENE** la reactivación de la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, debiendo las AFP privadas trasladar el saldo de la cuenta de ahorro individual a COLPENSIONES con sus rendimientos. Y que se condene en costas a las demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 24 de junio de 1973; que se encontraba cotizando en el RPM desde diciembre de 1994; que su empleador de forma autónoma comenzó a realizar los aportes en el RAIS administrado por PORVENIR S.A., entidad que no le suministró información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz al momento del traslado. Que en mayo de 1997 la trasladaron de PORVENIR S.A. a PROTECCIÓN S.A. Manifiesta que no se realizó el comparativo entre los dos regímenes, ni se le hizo mención sobre el derecho de retracto, o las características propias del RAIS; indica que no le brindaron ni antes de la afiliación ni durante la misma, información adecuada, suficiente, clara, comprensible, oportuna y cierta para su

traslado, explicando las ventajas y desventajas de ambos regímenes; que radicó el 30 de marzo de 2023 derecho de petición ante COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A. para que procedan con su traslado de régimen nuevamente ante COLPENSIONES; y que COLPENSIONES en respuesta a la solicitud, manifestó no poseer registros de haberle suministrado una asesoría a la demandante, mientras que PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. no entregaron respuesta alguna.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES indicó que son ciertos los hechos acerca de la fecha de nacimiento, la afiliación al RPM, la solicitud presentada ante la entidad y la respuesta dada; respecto de los demás hechos, manifiesta que no le constan en razón a que la entidad no tuvo injerencia alguna en ellos. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones por carecer de sustento jurídico y fáctico. Propone como excepciones de mérito inexistencia de obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, responsabilidad sui generis de las entidades de seguridad social, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe y prescripción.

PROTECCIÓN S.A. contestó la demanda manifestando que es cierta la fecha de nacimiento, así como la fecha de afiliación y la solicitud presentada ante esa AFP; que no es cierto que al momento del traslado el Fondo no se le brindó la información suficiente, clara, integral, comprensible y objetiva, pues fue todo lo contrario; y frente a los demás hechos, manifiesta que no le constan por ser ajenos a la entidad. Se opone a todas y cada una de las pretensiones por ser el acto existente, válido, exento de vicios y de cualquier fuerza para realizarlo. Planteó como excepciones inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones, reconocimiento de

restitución mutua a favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguros previsionales cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, porque afecta derecho de terceros de buena fe, y aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento al caso concreto.

Por su parte, PORVENIR S.A. dice que no son ciertos los hechos de la afiliación de la demandante al RPM, como tampoco la afiliación por parte del empleador de la actora al RAIS, ni el señalamiento de no dar información al momento del traslado sobre las características propias del RAIS. Frente a los demás hechos, manifiesta que no le constan por ser hechos que no son susceptibles de ser probados mediante confesión, son apreciaciones subjetivas efectuadas por la parte demandante, y se trata hechos ajenos a la entidad. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones al no existir causal legal de ineficacia del acto jurídico de afiliación de la demandante. Propone como excepciones eficacia de la afiliación al RAIS e inexistencia de vicios en el consentimiento, aplicación del artículo 1746 del Código Civil en relación con los rendimientos financieros, gastos de comisión y primas de seguro, pago, compensación, prescripción y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2023, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS; **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES los recursos de la cuenta de ahorro individual de la actora, incluyendo el capital, rendimientos, gastos de administración, cuotas de los seguros previsionales y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima; **CONDENÓ** a PORVENIR S.A a trasladar a COLPENSIONES lo deducido por gastos de administración, las cuotas de los seguros previsionales y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a recibir estos dineros y

reflejarlos como semanas en la historia laboral, y activar la afiliación al RPM; y **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de PORVENIR S.A. señaló que no se debe trasladar a COLPENSIONES los gastos de administración, primas de seguros previsiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, al considerar que se está castigando a PORVENIR S.A. por cumplir lo ordenado por la ley vigente, pues el cobro de esos dineros fue realizado por una orden legal, además de que ya no se encuentran en las cuentas de la AFP, debido a que fueron descontados como aportes al fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, los cuales fueron remitidas a sus destinatarios. Señala que, frente a los gastos de administración, fueron dineros utilizados por el fondo para hacer rendir los aportes que había hecho la demandante durante el tiempo de afiliación. Respecto de la condena de devolver lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima, estima que se debió ordenar que a este fondo a que remitiera esas sumas de dinero a COLPENSIONES. Y que no se le debe condenar en costas, ya que el fondo actuó de buena fe, de acuerdo a la ley vigente en el momento en que la demandante realizó el traslado de régimen, además de que PORVENIR no es el que debe declarar la ineficacia del traslado sino un juez laboral, el cual es el encargado de decretar dicha nulidad en razón a que la demandante se encuentra en la prohibición de traslado de régimen del artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

Se conoce igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

COLPENSIONES expuso que se debe analizar lo referente a la imposibilidad de traslado de régimen establecido en el artículo 2 de la

Ley 797 de 2003, en razón a que la demandante solicitó el traslado de forma posterior al cumplimiento de la edad límite, señalando que el único interés de la actora para retornar al RPM es uno económico. Manifiesta que el engaño invocado para iniciar el presente proceso no se encuentra acreditado, y de esta manera la ineficacia del traslado carece de viabilidad, en vista a que no se probó que el consentimiento de la actora se haya visto afectado. Y que, en caso de proceder la ineficacia, se ordene la devolución de todos los rubros percibidos por el fondo privado, incluyendo la devolución de los gastos de administración, así como lo descontado por las pólizas provisionales debidamente indexados.

PORVENIR S.A. en sus alegaciones, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, en razón a que el fondo cumplió a cabalidad con el deber de asesoría e información conforme a la fecha de afiliación de la demandante. Afirma, además, que la demandante tenía la voluntad de continuar afiliada al RAIS, cosa que a su consideración se encuentra acreditada al no ejercer su derecho de retracto, por cotizar más de 28 años y trasladarse entre administradoras del mismo régimen. Señala que de confirmarse la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, de acuerdo al artículo 1746 del Código Civil, se revoque la condena de trasladar los rendimientos, los descuentos al fondo de garantía de pensión mínima, gastos de administración y comisiones, por desconocer que hay un tipo de prestaciones que por su naturaleza no pueden retrotraerse, constituyéndose un límite a los efectos retroactivos de la declaratoria de ineficacia, teniendo en cuenta que la ficción jurídica de la declaratoria de ineficacia hace entender que la actora siempre estuvo afiliada al RPM, por lo que no procede la devolución de los rendimientos financieros. Indica que se debe autorizar a la AFP a descontar el concepto de restituciones mutuas. Señala que no se deben devolver los seguros, ya que fueron cancelados a las aseguradoras, y que, al devolver el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, se está imponiendo un doble pago del mismo concepto al fondo de pensiones. Y que, respecto de la condena

en costas, señala que se encuentra en desacuerdo, en razón a que PORVENIR S.A. actuó de acuerdo a la ley vigente al momento del traslado de régimen.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, y, asimismo, resolver en grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* la Sra. CLAUDIA ELENA GOMEZ ACOSTA nació el 24 de junio de 1973¹; *ii)* se afilio por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones desde diciembre de 1994²; *iii)* que el 16 de febrero de 1995³ suscribió formulario de afiliación ante PORVENIR S.A.; y *iv)* el 30 de abril de 1997⁴ suscribió formulario de afiliación ante PROTECCION S.A., entidad en la que se encuentra vinculada actualmente.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

¹ Folio 20 de la demanda.

² Folio 536 de la contestación de Colpensiones.

³ Folio 57 de la contestación de PORVENIR S.A.

⁴ Folio 19 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle a la afiliada una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁵, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en*

⁵ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente, pues ello no demuestra por sí solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen, que los traslados realizados tanto a PORVENIR S.A. y PROTECCION S.A., fueron en razón al ingreso a nuevos trabajo, por lo que solo firmaba el formulario de afiliación; que no recuerda la existencia de asesores al momento del traslado; afirma que no se le brindó información respecto de las características del RAIS y el RPM, ni las formas de acceder a la pensión en cada uno de ellos, y que en ningún momento fue nuevamente asesorada sobre su situación pensional por parte de ninguno de los fondos de pensión.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo dicho permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

No es de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frete al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos*

definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe***

devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado la respectiva afiliada “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los

valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora CLAUDIA ELENA GÓMEZ ACOSTA estuvo vinculada a cada entidad.

Se advierte que la orden dada a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos cuotas de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva **indexación**, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según fue solicitado por COLPENSIONES con la contestación a la demanda, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que "*... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.*" Por tal razón, la sentencia de primera instancia será **ADICIONADA** en este aspecto.

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que, junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas a los fondos privados, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Condena en costas

Finalmente, otro tema que cuestiona la apoderada de PORVENIR S.A. a través de su recurso de apelación, tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea la recurrente, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se CONDENARÁ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

En consecuencia, se la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y ADICIONADA.**

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.300.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 24 de noviembre de 2023, y la **ADICIONA** en el sentido de ordenar a las AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., que los conceptos por cuotas de administración, primas de seguros previsionales y porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación, asimismo, estos conceptos trasladados deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizados de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **022c3ed1a80187960f901ff1f76c8e1641df6c469d38684f991d1917bb8018cc**

Documento generado en 12/03/2024 11:51:12 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>